

Observaciones preliminares del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Morris Tidball-Binz, a conclusión de su visita a Argentina (14-25 de noviembre 2022)

1. Introducción

Por invitación del Estado, visité Argentina del 14 al 25 de noviembre de 2022 con el objetivo de evaluar los esfuerzos realizados en el país en el ámbito de la prevención e investigación de todas las muertes potencialmente ilícitas.

Me concentré en evaluar especialmente la cuestión de la violencia institucional, lo que incluye el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el contexto de la ejecución de la ley y actuación policial; el tema de las muertes bajo custodia; así como las muertes por violencia de género con resultado de muerte.

Quiero comenzar agradeciendo sinceramente al Gobierno argentino por invitarme a realizar esta visita oficial, así como por su valiosa cooperación en la organización de las reuniones oficiales.

Se trata de una visita histórica a Argentina. Es la primera que ocurre en los 40 años del mandato del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Desde su transición a la democracia en 1983, Argentina ha consolidado una sólida cultura de derechos humanos que se refleja, entre otras cosas, en los logros ejemplares en materia de verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado y en su actual presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los esfuerzos y logros del país para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes del pasado, incluyendo mediante el uso pionero de las ciencias forenses, son hoy ampliamente reconocidos como un ejemplo en América del Sur y en el mundo.

En ese mismo sentido, es destacable la invitación efectuada al mandato por Estado argentino para realizar esta importante visita poco antes de cumplirse el 40° aniversario de institucionalidad democrática ininterrumpida en Argentina que se celebrará en 2023.

El Relator Especial quisiera agradecer a las personas, familias y organizaciones que le abrieron sus oficinas y compartieron su tiempo, sus historias, sus experiencia y conocimientos. También quisiera extender su gratitud al Gobierno y al pueblo argentino por su invitación y su cooperación antes y durante esta visita; asimismo aprecia las discusiones abiertas y francas con todos/as los interlocutores/as con los/as con quienes intercambié. Destaca y agradece el apoyo prestado por la Asesora de Derechos Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente de ONU Argentina y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la asistencia brindada por la Oficina de la Coordinadora Residente y el Equipo de las Naciones Unidas en el país.

Mi visita incluyó la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Chaco, adonde visité las ciudades de La Plata, Córdoba, Corrientes y Resistencia, respectivamente. Durante la visita tuve la oportunidad de encontrar y entrevistarme con un gran número de representantes de organismos del Estado, incluyendo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y entes autónomos, con entidades académicas y con organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, como así también con un gran número de familiares de víctimas de violencia institucional, incluyendo muertes en custodia y por violencia de género, pudiendo en todos los casos mantener un libre y franco diálogo sobre temas de interés para mi mandato.

Agradezco sinceramente la hospitalidad y la amabilidad con la que fui recibido, el diálogo franco, la apertura y confianza de todos y todas las personas con las que tuve el gusto de reunirme. La visita ofreció una oportunidad inigualable para constatar los logros, identificar buenas prácticas, como así también los desafíos pendientes para prevenir toda muerte arbitraria, evitar la impunidad y atender los reclamos de la víctimas.

Las observaciones preliminares que presento hoy se basan fundamentalmente en la información recibida durante la visita. En junio 2023, presentaré el informe final de la visita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

2. Observaciones preliminares

Argentina es hoy un ejemplo de sólida institucionalidad y cultura de los derechos humanos, incluyendo en materia de verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado, sobre lo cual ha logrado constituirse en un referente y modelo, incluso sobre el uso pionero de las ciencias forenses.

Es importante subrayar el papel indispensable desempeñado en ese sentido por la sociedad civil, en particular las víctimas y sus familiares, para la consolidación del estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos, incluyendo mediante su contribución a una eficaz prevención e investigación de violaciones de los derechos humanos.

En particular, quiero destacar el aporte extraordinario de las Abuelas de Plaza de Mayo y del Equipo Argentino de Antropología Forense, por su carácter pionero en el desarrollo y uso de métodos científicos para la investigación de las violaciones de los derechos humanos y en la identificación de las víctimas, incluyendo la genética y la antropología forenses, y que contribuyeron también a la elaboración de estándares universales y modelos de investigación de muertes ilícitas y desaparición forzada que son de gran utilidad para los y las operadores/as judiciales, como el [Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas \(2016\)](#).

El Protocolo es hoy el referente mundial en la materia y una herramienta probadamente útil para investigar de manera confiable y ayudar a prevenir toda muerte potencialmente ilícita. Por lo tanto, hago un llamado para que sea debidamente aplicado y utilizado en todo el país para la investigación de todas las muertes por violencia institucional, muertes en custodia y por violencia de género.

En este sentido, quiero recomendar que se cree un mecanismo a nivel nacional para los servicios de medicina legal y las ciencias forenses de todo el país, a fin de promover y apoyar la efectiva implementación de este y de otros estándares de buena práctica forense, coordinar esfuerzos en la materia y apoyar procesos de control y garantía de calidad de los servicios médico legales y forenses en todo el país.

Durante la visita he constatado que subsisten en el país prácticas de violencia institucional, incluyendo violaciones de los derechos humanos con resultado de muertes y que afectan principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad y más marginalizados de la población, lo cual contribuye a la invisibilización del fenómeno, a la impunidad de los responsables y a la perpetuación de prácticas contrarias al estado de derecho.

Las víctimas de violencia policial, por ejemplo, tienden a ser desproporcionadamente hombres jóvenes, así como niños y adolescentes pertenecientes a barrios y sectores marginalizados, incluyendo miembros de pueblos indígenas y otros grupos marginalizados. Además, durante el período de la pandemia durante el cual Argentina impuso su primer confinamiento a nivel nacional, a partir de marzo de 2020, el control de medidas restrictivas de la circulación por parte de fuerzas policiales contribuyó a exponer prácticas de violencia institucional por parte de dichas fuerzas. Es notable al respecto que no existan estadísticas unificadas y confiables sobre muertes por violencia institucional y, por lo tanto, la magnitud y la gravedad reales de este fenómeno en todo el territorio nacional continúan invisibilizadas en gran medida.

Hago un llamado urgente al Estado argentino a erradicar estas prácticas mediante la implementación de medidas urgentes y concretas, incluyendo para garantizar la investigación eficaz y confiable de toda muerte potencialmente ilícita, la sanción de los responsables y la reparación adecuada a las víctimas.

En este sentido, pude constatar que los familiares de las víctimas con frecuencia enfrentan grandes desafíos, incluyendo discriminación, para acceder a la justicia, así como obstáculos en las investigaciones e incluso hostigamientos y amenazas de parte de los mismos acusados, quienes suelen beneficiarse de impunidad.

Cabe sin embargo destacar que, como lo demuestran algunos pocos casos de violencia institucional señalados al Relator Especial, el sistema de justicia puede funcionar correctamente cuando todos los mecanismos de investigación son utilizados eficazmente y los/as operadores/as de justicia están plenamente capacitados/as y existe la voluntad de las autoridades de aclarar los delitos con pleno respeto de los derechos humanos. Sin embargo, los ejemplos de buenas prácticas son la excepción, cuando deberían ser la regla.

Por ello, insto a las autoridades garantizar que en todos los casos de violencia institucional con resultado de muerte se investigue y sancione a los responsables de toda muerte ilícita, se brinde la asistencia jurídica adecuada y la protección necesaria a las víctimas y que se implementen programas continuos de capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley junto con un control independiente de su accionar. Esto último a fin de asegurar el cumplimiento en todo momento de los estándares pertinentes, incluyendo los [Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley](#) y las [Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden](#).

Asimismo, es necesario que el Proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional, actualmente pendiente en el Congreso de la Nación, se trate y apruebe con celeridad. Este proyecto de ley apunta a establecer un marco más amplio para documentar, registrar, combatir y prevenir la violencia institucional en el país, proporcionar apoyo y reparación a las víctimas y fortalecer con ello el estado de derecho, pudiendo constituirse así en un modelo de buena práctica para otros países.

Como en el caso de las muertes por violencia institucional, tampoco existen estadísticas unificadas y confiables sobre muertes en custodia que ocurren en el país, lo cual dificulta o imposibilita elaborar políticas efectivas para la prevención y la erradicación del fenómeno. Hago por ello un llamado a las autoridades para que se implementen los mecanismos existentes a fin de consolidar y publicar estas estadísticas.

Por último, pese a los destacables esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la materia, me preocupa sobremanera la persistencia de violencia con resultado de muertes por razones de género u orientación sexual. Según los informes, Argentina registró 231 femicidios en 2021, incluyendo un número desproporcionado de estos crímenes cometidos por agentes del orden haciendo uso de armas reglamentarias estando fuera de servicio. Insto por ello a redoblar esfuerzos para prevenir toda muerte por violencia de género u orientación sexual, incluso garantizando que todos estos casos se investiguen de acuerdo con las normas internacionales, como el [Protocolo Modelo Latinoamericano para la investigación de los asesinatos de mujeres por razones de género](#).

3. Recomendaciones preliminares

A la luz de las consideraciones anteriores, el Relator Especial desea formular las siguientes recomendaciones preliminares:

- 1. Garantizar que cada muerte potencialmente ilícita se investigue de manera rápida, independiente, imparcial, efectiva, exhaustiva y transparente según los estándares internacionales en la materia, en particular el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de las muertes potencialmente ilícitas (2106);**
- 2. Crear un Consejo Nacional de Medicina Forense** afín de promover y apoyar la efectiva implementación en todo el país del Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) y otros estándares de buena práctica forense, como así también para coordinar esfuerzos en la materia y apoyar procesos de control y garantía de calidad de los servicios médico legales y forenses en todo el país;
- 3. Aprobar sin demora el Proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de los Agentes Policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios;**
- 4. Capacitar a todos/as los/as agentes con mandato para el uso de la fuerza, con miras a ajustar su accionar a las normas y estándares internacionales** incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden;
- 5. Asegurar que se realicen y publiquen periódicamente estadísticas unificadas a nivel nacional y confiables, incluyendo mediante la desagregación de datos, sobre todas las muertes en situación de privación de libertad registradas en el país;**
- 6. Garantizar el acceso a justicia sin discriminación alguna, la asistencia jurídica y la protección a las víctimas de violencia institucional, monitoreando y**

minimizando el uso indebido de la fuerza contra los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a miembros de pueblos originarios.

El Relator Especial desea continuar y profundizar el diálogo constructivo que ha caracterizado sus intercambios con el Gobierno argentino y reitera que está dispuesto a prestar asistencia técnica y servicios de asesoramiento, según proceda, a todas las autoridades nacionales competentes, para que implementen de manera efectiva sus recomendaciones.

Junto con ofrecer la asistencia de su mandato, el Relator Especial invita a la comunidad internacional, incluyendo el Sistema de las Naciones Unidas, a apoyar los esfuerzos del Estado argentino para implementar las recomendaciones mencionadas.

El Relator Especial también sigue estando disponible para examinar otras cuestiones pertinentes, que corresponden a su mandato, que el Gobierno argentino desee someter a su consideración con el objetivo de apoyar a las autoridades competentes en sus esfuerzos para reforzar la protección de los derechos humanos a nivel nacional.

Preliminary observations of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mr. Morris Tidball-Binz, upon ending his visit to Argentina (14-25 November 2022)

1. Introduction

I was invited by Argentina to visit the country on 14-25 November 2022 with a view to assessing the country's efforts to prevent and investigate all potentially unlawful deaths.

I focused mainly on examining institutional violence, which includes the excessive and disproportionate use of force by law enforcement officials, deaths in custody and gender-based violence resulting in death.

I would like to very sincerely thank the Argentine Government for inviting me to carry out this official mission and for their valuable cooperation in organizing official meetings.

It is no doubt a historical visit to Argentina, the first in 40 years after the establishment of the mandate of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. Since its transition to democracy in 1983, Argentina has consolidated a sound human rights culture that is reflected, *inter alia*, in the exemplary achievements in terms of truth, justice and reparation for past crimes and as current chair of the UN Human Rights Council. All the country's efforts and achievements to ensure accountability for crimes of the past, including their pioneer role in the use of forensic sciences, are nowadays widely recognized as an example in South America and the world.

In this regard, it is worth highlighting that the invitation of the Argentine State for the mandate to carry out this significant visit takes place just before the 40th anniversary of uninterrupted democratic institutions in Argentina to be celebrated in 2023.

The Special Rapporteur would like to thank the individuals, families and organizations that opened the doors of their offices and shared time, stories, experiences and knowledge. His gratitude also goes to the Argentine Government and people for their invitation and cooperation before and after the visit. He very much appreciates the open, candid discussions with all those whom he met with and would like to thank the Human Rights Advisor of the Resident Coordinator's Office (RCO) in Argentina and of the UN High Commissioner for Human Rights

(UNHCHR) Office for her support, and also the Resident Coordinator's Office and the United Nations Country Team for their assistance.

My visit included the City of Buenos Aires and the provinces of Buenos Aires, Cordoba, Corrientes and Chaco where I went to the cities of La Plata, Cordoba, Corrientes and Resistencia, respectively. During the visit I had a chance to meet and interview a great number of representatives of State agencies, including all three branches, the Executive, the Legislature and the Judiciary, and also autonomous agencies, academia, non-governmental organizations, at the national and provincial levels, as well as many relatives of victims of institutional violence, including those who died in custody or due to gender-based violence. In all cases, I was able to speak freely and candidly to them on topics of interest for my mandate.

I very sincerely thank all those whom I had the pleasure of meeting for their hospitality and kindness, for the candid conversations held with them and for their openness and trust. The visit offered an unparalleled opportunity to verify achievements, identify good practices as well as the pending challenges to prevent all arbitrary deaths, avoid impunity and address victims' claims.

The preliminary observations presented hereunder are mainly based on information received during my visit. In June 2023, I will present the final report on my visit to the UN Human Rights Council.

2. Preliminary observations

Argentina is today an example of a solid institutional framework and human rights culture, including in matters of truth, justice and reparation for past crimes, based on which it has managed to become a benchmark and model, and, moreover, has played a pioneering role in the use of forensic science.

It is important to underline the essential role played in this regard by civil society, particularly by victims and their families, to consolidate the rule of law and full respect for human rights, including through their contribution to effective prevention and investigation of human rights violations.

I wish to very especially highlight the extraordinary contribution of the Plaza de Mayo Grandmothers; and the Argentine Forensic Anthropology Team, for being pioneers in the development and use of scientific methods to investigate human rights violations and identify victims, including forensic genetics and anthropology, also contributing to the development of universal standards and investigation models for unlawful deaths and enforced disappearances, such as the [Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death \(2016\)](#).

This Protocol is nowadays the world's reference document in the matter and has proven to be a useful tool to reliably investigate and help prevent all potentially unlawful deaths. Therefore, I call upon you for said protocol to be duly applied and used nation-wide for investigating all deaths due to institutional violence, deaths in custody and due to gender-based violence.

In this regard, I would like to recommend the creation of a national mechanism to provide legal medicine and forensic science services across the country, to promote and support the effective implementation of this and other good forensic practice standards, as well as to support the oversight and quality control of legal and forensic medical services throughout Argentina.

During my visit I confirmed the persistence in the country of institutional violence practices, including human rights violations resulting in deaths and mainly affecting the most vulnerable and marginalized sectors of the population, which contributes to rendering this phenomenon invisible, to impunity for perpetrators and to a perpetuation of practices that go against the rule of law.

Among the victims of police violence, for instance, there is a disproportionate number of young men, as well as boys and adolescents from marginalized neighborhoods and sectors, including members of indigenous peoples and other marginalized groups. In addition, during the pandemic when Argentina imposed its first lockdown at the national level, starting in March 2020, the control of restrictive measures on movement by police forces contributed to exposing practices of institutional violence by said forces. In this regard, remarkably there are no unified and reliable statistics on deaths due to institutional violence and, therefore, the real size and seriousness of this phenomenon across the country remains largely invisible.

I urge the Argentine State to eradicate these practices by implementing urgent, specific measures, including efficient and reliable investigations for all potentially unlawful deaths, punishing perpetrators and appropriately redressing victims.

In this regard, I was able to confirm that the victim's relatives often times face great challenges to achieve truth and justice, including discrimination, obstacles in investigations, and even harassment and threats from the defendants themselves, who frequently benefit from impunity.

However, it should be noted that, as demonstrated by a few cases of institutional violence reported to the Special Rapporteur, the justice system can work properly when all investigation mechanisms are used effectively and justice operators are fully trained, and the authorities are willing to clarify crimes with full respect for human rights. However, good practice examples are the exception, when they should be the rule.

Therefore, I urge authorities to ensure all cases of institutional violence resulting in death are investigated and the culprits for all unlawful death, punished, providing victims appropriate legal assistance and the necessary protection and, moreover, ensure ongoing training programmes for law enforcement officials are implemented, with an independent oversight of their actions. The latter, to ensure compliance at all times with the pertinent standards, including the [Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials](#) and the [United Nations Human Rights Guidance on the Use of Less-Lethal Weapons in Law Enforcement](#).

Furthermore, it is necessary to ensure a speedy consideration and approval of the Comprehensive Bill Against Institutional Violence, currently pending before Argentina's Congress. This bill is intended to establish a broader framework to document, register, combat and prevent institutional violence in the country, provide support and reparation to victims and thereby strengthen the rule of law, with the possibility of becoming a model of good practices for other countries.

Just like in the case of deaths due to institutional violence, there are no unified and reliable statistics on deaths in custody that occur in the country, which makes it difficult or even impossible to develop effective policies for their eradication and prevention. I therefore call

upon the authorities to implement existing mechanisms to thus consolidate and publish these statistics

Finally, and despite noteworthy efforts by the State and civil society in this field, I am very much concerned about the persistence of violence resulting in death due to the person's gender or sexual orientation. According to reports, Argentina registered 231 femicides in 2021, including a disproportionate number of these crimes committed by law enforcement officials using their service weapons while off duty. I therefore urge you to redouble your efforts to prevent all deaths from gender-based violence or sexual orientation, including by ensuring that all such cases are investigated in accordance with international standards, such as the [Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women](#).

3. Preliminary Recommendations

In light of the above considerations, the Special Rapporteur would like to put forward the following preliminary recommendations:

- 1. Ensure that any potentially unlawful death be promptly, independently, impartially, effectively, thoroughly and transparently investigated pursuant to international standards in the matter, particularly the Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016).**
- 2. Establish a National Council on Forensic Medicine** to promote and support the effective implementation nation-wide of the Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) and other good forensic practice standards, as well as to coordinate efforts in this field and support oversight and quality assurance processes of the medical legal and forensic services across the country;
- 3. Speedily pass the Bill to Comprehensively Address Institutional Violence by Police Agents in Security and Penitentiary Services.**
- 4. Train all agents with a mandate to use force, so as to adjust their actions to international norms and standards, including the Basic Principles on the Use of**

Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Human Rights Guidance on the Use of Less-Lethal Weapons in Law Enforcement;

5. **Ensure that unified and reliable statistics are periodically obtained and published at the national level, including a breakdown of data on all deaths among those deprived of their freedom in the country;**
6. **Ensure access to justice without any discrimination whatsoever, legal assistance and protection for victims of institutional violence, monitoring and minimizing undue use of force against vulnerable groups, including indigenous peoples.**

The Special Rapporteur wishes to continue and further deepen the constructive dialogue that has characterized his exchanges with the Argentine Government and reiterates his willingness to provide technical assistance and advice, as appropriate, to all competent national authorities, so that they can effectively implement his recommendations.

Along with offering the assistance of his mandate, the Special Rapporteur invites the international community, including the United Nations System, to support the efforts of the Argentine State in implementing the above-mentioned recommendations.

The Special Rapporteur also remains available to discuss other relevant issues falling within his mandate, and that the Argentine Government may wish to submit to his consideration with the aim of supporting the competent authorities in their efforts to strengthen the protection of human rights at the national level.
